



13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal



Doha, 12 a 19 de abril de 2015

Distr. general
2 de febrero de 2015
Español
Original: inglés

Tema 6 del programa provisional*

**Enfoques nacionales de la participación pública en el
fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal**

Seminario 4. La contribución pública a la prevención del delito y la promoción del conocimiento de la justicia penal: experiencias y lecciones aprendidas**

Documento de antecedentes

Resumen

En el plano mundial hay un interés creciente en las iniciativas que alientan la contribución pública a los procesos de prevención del delito y justicia penal y la participación en ellos. Las Directrices para la Prevención del Delito establecen que corresponde a los gobiernos una función de liderazgo en la formulación de estrategias de prevención del delito, pero también dicen que la cooperación y las alianzas entre las organizaciones comunitarias, las organizaciones no gubernamentales, el sector empresarial y los ciudadanos deben ser parte integrante de toda estrategia eficaz de prevención del delito.

El presente documento de antecedentes se centra en tres importantes cuestiones relacionadas con la contribución pública a la prevención del delito y la promoción del conocimiento de la justicia penal. Figuran entre ellas la participación pública en el plano local, el papel que desempeña el sector privado y el papel de los medios de comunicación, las redes sociales y las nuevas tecnologías de las comunicaciones.

Los ejemplos que se ofrecen de mejores prácticas y lecciones aprendidas procedentes de todas las regiones tienen por objeto presentar una variedad de experiencias que servirán para aumentar la participación pública en la prevención del delito y la justicia penal. Al final del documento se presentan recomendaciones concretas dirigidas a los Estados Miembros.

* A/CONF.222/1.

** La Secretaría de las Naciones Unidas desea manifestar su agradecimiento a los miembros de la red de institutos del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, y en especial al Instituto Australiano de Criminología por su ayuda en la organización del seminario.



Dado que sirve de complemento a las deliberaciones sobre el tema 6 del programa, relativo a los enfoques nacionales de la participación pública en el fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal, el seminario 4 arroja luz sobre algunos de los parámetros básicos del tema desde la perspectiva de las partes interesadas no estatales.

Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción.....	4
A. Objetivos y fines.....	5
B. Enmarcar el papel de la participación pública en la prevención del delito y los procesos de justicia penal.....	6
C. Progresos realizados desde la celebración del 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal.....	7
II. Participación pública en el plano local: iniciativas a nivel comunitario destinadas a promover la contribución pública a la prevención del delito y la justicia penal.....	9
A. Panorama general.....	9
B. Función de los procesos de justicia alternativa para atender a las necesidades de los jóvenes y los grupos marginados socialmente.....	10
C. Participación pública en la promoción del acceso a la justicia.....	11
D. Policía de proximidad y modelos de participación comunitaria en la prevención de la reincidencia.....	12
E. Apoyo y refuerzo de la participación pública mediante el desarrollo de sistemas de acceso a información estadística de alta calidad sobre la delincuencia.....	14
III. Función del sector privado en las actividades de prevención del delito y la justicia penal. . .	14
A. Panorama general.....	14
B. Enfoques de las alianzas del sector privado encaminadas a promover la participación pública en la prevención del delito y los procesos de justicia penal.....	15
C. El papel del sector empresarial en el desarrollo y la prevención del delito mediante el diseño.....	16
IV. El papel de los medios de comunicación, las redes sociales y las nuevas tecnologías de las comunicaciones.....	17
A. Panorama general.....	17
B. Aplicación de enfoques de la mercadotecnia social para facilitar la contribución pública a la prevención del delito y la justicia penal.....	18
C. Utilización de las comunidades en Internet y los nuevos medios para la difusión de conocimientos y aptitudes: riesgos y oportunidades.....	19
D. Las redes sociales y la labor policial moderna: retos y logros.....	20
E. El papel de los medios de comunicación tradicionales: influencia de los medios de comunicación en las estrategias de prevención del delito.....	21
V. Conclusiones y recomendaciones.....	21

I. Introducción

1. La experiencia del delito y la victimización es un fenómeno universal, pero difiere en la forma en que se manifiesta en las distintas comunidades y poblaciones de todo el mundo, y en la frecuencia con que lo hace¹. Para ayudar a las personas más vulnerables a la delincuencia se requieren respuestas integradas y basadas en datos empíricos que tengan en cuenta múltiples factores de riesgo. Según se indica en las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito², un factor esencial para la prevención de la delincuencia es un riguroso proceso de planificación que incluya un análisis sistemático de los problemas de la delincuencia, sus causas, los factores de riesgo y las consecuencias³.

2. Esto reviste particular importancia en el plano local, en que los sectores responsables de contribuir a la seguridad pública pueden colaborar para alcanzar ese objetivo. Efectivamente, los ciudadanos tienen un interés personal y una función que desempeñar en lo que atañe a la prevención del delito y pueden constituir un recurso valioso para las autoridades nacionales al hacer frente a la delincuencia. Las estrategias de prevención ofrecen la oportunidad de involucrar a la sociedad civil y los grupos afectados en las actividades de colaboración para aumentar la seguridad. Esa participación puede ser útil para mejorar la percepción de la legitimidad de los programas, aumentar la rendición de cuentas, derribar las barreras de desconfianza entre las autoridades policiales y la sociedad civil y mejorar la eficacia de las investigaciones penales.

3. Por otra parte, hay un reconocimiento creciente a nivel mundial del importante papel que desempeñan los organismos encargados de hacer cumplir la ley en la protección de la salud de las personas y la salud pública, en especial en comunidades que se caracterizan por su diversidad y vulnerabilidad. Las alianzas entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las organizaciones de la sociedad civil facilitan a los grupos vulnerables (las personas que consumen drogas y la población penitenciaria) el acceso a servicios de salud basados en datos empíricos y en los derechos humanos, lo que a su vez contribuirá a reducir la delincuencia y fomentar en la comunidad la confianza en los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

4. Las Directrices para la Prevención del Delito establecen que corresponde a los gobiernos desempeñar una función de liderazgo en la formulación de estrategias de prevención del delito, pero también afirman que la cooperación y las alianzas con las organizaciones comunitarias, las organizaciones no gubernamentales, el sector empresarial y los ciudadanos deben ser parte integrante de toda estrategia eficaz de prevención del delito. La importancia de las alianzas público-privadas se reconoció en la Declaración de Salvador sobre Estrategias Amplias ante Problemas Globales: los Sistemas de Prevención del Delito y Justicia Penal y su Desarrollo en un Mundo en Evolución, aprobada en el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del

¹ Véase el Estudio Internacional sobre Victimización. Puede consultarse en la dirección siguiente: www3.unil.ch/wpmu/icvs.

² Resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social, anexo.

³ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), *Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices para la prevención del delito*, Serie de Manuales de Justicia Penal (2010).

Delito y Justicia Penal celebrado en Salvador (Brasil) del 12 al 19 de abril de 2010, que la Asamblea General hizo suya en su resolución 65/230. En esa Declaración, los Estados Miembros expresaron su convencimiento de que a través del intercambio de información, conocimientos y experiencia y mediante acciones conjuntas y coordinadas, los gobiernos y las empresas podían elaborar, mejorar y aplicar medidas para prevenir la delincuencia y enjuiciar y sancionar a los autores de delitos.

A. Objetivos y fines

5. En el plano mundial hay un interés creciente en las iniciativas que cuentan con la participación del público en la prevención del delito y la reforma de la justicia penal, y también un número cada vez mayor de ejemplos de esa participación. En este contexto, y considerando el amplio alcance del tema 6 del programa, que se centra en el papel de los gobiernos para lograr la participación del público, los debates del seminario 4 servirán de complemento a las deliberaciones sobre el tema 6 del programa, centrándose en otros agentes.

6. Los objetivos generales del seminario son los siguientes:

a) Trazar un panorama de los agentes y protagonistas que, en el marco de la comunidad más amplia, tienen interés en contribuir a prevenir la delincuencia y promover el conocimiento del proceso de justicia penal, y están en condiciones de hacerlo, y debatir los beneficios de esa participación;

b) Definir y difundir la creciente variedad de iniciativas y enfoques comunitarios innovadores relativos a la prevención de la delincuencia y la reforma de la justicia penal;

c) Debatir las dificultades y beneficios de la coordinación de la participación del público en el plano local para lograr una acción de colaboración multisectorial que responda con eficacia a las necesidades de las comunidades y tenga una repercusión sostenible;

d) Examinar algunos de los ejemplos polémicos y controvertidos de colaboración entre el sector empresarial, las autoridades nacionales y la comunidad en lo tocante a prevención de la delincuencia y el funcionamiento de la justicia penal;

e) Reconocer y comprender mejor los distintos contextos, entornos y enfoques adoptados por la sociedad civil y otros agentes no gubernamentales a fin de promover el programa de prevención de la delincuencia y reforma de la justicia penal y alentar a los gobiernos a que adopten enfoques basados en la comunidad;

f) Impulsar una apreciación más amplia del importante papel de los medios de comunicación, el sector empresarial, los jóvenes y las víctimas de la delincuencia en la tarea de crear conciencia acerca del sistema de justicia penal y las oportunidades de prevención del delito.

B. Enmarcar el papel de la participación pública en la prevención del delito y los procesos de justicia penal

7. En consonancia con las recomendaciones formuladas por el Consejo Económico y Social en su resolución 2002/13, relativa a las medidas para promover la prevención eficaz del delito, se alienta a las comunidades a contribuir a determinar las prioridades de la prevención del delito y ayudar a determinar una base sostenible de recursos. Las iniciativas en favor del cambio pueden basarse en personas con autoridad y recursos concretos limitados que poseen, no obstante, la habilidad de ejercer influencia en los demás en favor del cambio de las estructuras sociales. A menudo esas iniciativas se conciben, se ponen en marcha y se llevan a la práctica en el contexto de las comunidades locales⁴; frecuentemente se trata de iniciativas espontáneas que surgen en respuesta a las necesidades inmediatas y se centran en cuestiones políticas o sociales concretas. Sin embargo, los movimientos que surgen en el plano local tienen asimismo el potencial de ejercer influencia en las estructuras nacionales al alentar un mayor nivel de repuesta de los organismos gubernamentales a las necesidades locales detectadas.

8. En el contexto de la participación de la comunidad en el sistema de justicia penal, es importante entender los conceptos de justicia local y justicia comunitaria. Por justicia local se entiende el ejercicio de la facultad de adopción de decisiones y la autoridad del sistema de justicia por órganos lo más cercanos posible a las comunidades locales. Basada en el concepto de subsidiariedad (como se explica más adelante), la justicia local se vincula a la transferencia de poder de los gobiernos centrales a estructuras de ámbito más localizado. La justicia comunitaria se refiere, en sentido lato, a las actividades de justicia y prevención del delito en todas sus variantes en cuyos procesos está incluida expresamente la comunidad. Se origina en las medidas que pueden adoptar los ciudadanos, las organizaciones comunitarias y el sistema de justicia penal para controlar la delincuencia y las alteraciones del orden social. La justicia comunitaria se centra principalmente en los resultados a nivel de la comunidad, y se pasa a hacer hincapié no en incidentes aislados sino en aquellos en que se observan rasgos sistémicos comunes, no en la conciencia individual sino en las costumbres sociales y no en los bienes individuales sino en el bien común.

9. En respuesta a quienes sostienen que el sistema de justicia penal no concede suficiente atención a las consecuencias cotidianas del delito y los problemas sociales, se han formulado prácticas e innovaciones en materia de justicia comunitaria con miras a incluir expresamente a la comunidad en la adopción de decisiones, la solución de conflictos y la creación conjunta de servicios, y establecer como objetivo el mejoramiento de la “calidad de vida” de la comunidad local⁵. Esas iniciativas pueden fomentar la confianza en el sistema de justicia penal, puesto que tienen en cuenta las necesidades y opiniones de la comunidad al impartir justicia. También se considera que hacen hincapié en la reparación del daño causado a las víctimas y en que los autores de delitos respondan de sus actos; de ahí que en

⁴ Lucie Middlemiss y Bradley Parrish, “Building capacity for low-carbon communities: the role of grassroots initiatives”, *Energy Policy*, vol. 38, núm. 12 (diciembre de 2010).

⁵ Phil Bowen y Jane Donoghue, “Digging up the grassroots? The impact of marketization and managerialism on local justice, 1997 to 2013”, *British Journal of Community Justice*, vol. 11, núm. 2/3 (invierno de 2013).

algunos casos esas iniciativas se hayan institucionalizado mediante mecanismos de justicia restaurativa⁶.

10. Por último, a fin de apreciar la función de la participación a nivel local, resulta útil comprender el principio de subsidiariedad. La noción de subsidiariedad implica que una autoridad central debe tener una función subsidiaria (es decir, una función de apoyo y no de subordinación), y llevar a cabo únicamente las tareas que no pueden llevarse a cabo eficazmente a nivel más inmediato o local. A la inversa, cuando se determina que un problema es específico de una localidad, habrán de ocuparse de él a nivel local las autoridades locales responsables. Únicamente cuando una tarea no pueda ser realizada de manera adecuada o eficaz por las autoridades gubernamentales de determinado nivel deberá transferirse la responsabilidad a una instancia superior⁷. Por consiguiente, la implicación y participación de la comunidad local puede conducir a resultados óptimos en el ámbito de la prevención del delito y la justicia penal.

C. Progresos realizados desde la celebración del 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal

11. En la Declaración de Salvador, los Estados Miembros reconocieron que la elaboración y aprobación de políticas de prevención del delito, así como su supervisión y evaluación, eran responsabilidad de los Estados, y expresaron la opinión de que esa labor debería basarse en un enfoque participativo, de colaboración e integrado que comprendiera a todos los interlocutores pertinentes, incluidos los de la sociedad civil. Los Estados Miembros también reconocieron específicamente la importancia de fortalecer las asociaciones entre los sectores público y privado para prevenir y combatir la delincuencia en todas sus formas y manifestaciones⁸.

12. Además, en las secciones pertinentes de la Declaración, los Estados Miembros destacaron la necesidad de contar con planes de acción nacionales y locales sobre prevención del delito que tuvieran en cuenta los factores que exponen a determinadas poblaciones y zonas a un mayor peligro de victimización o de verse afectadas por actos delictivos, y reconocieron la importancia de que la sociedad civil y los medios de comunicación aseguraran que se instaurara una cultura de respeto del estado de derecho. Destacaron también la necesidad de fortalecer las medidas sustitutivas del encarcelamiento, incluidas las medidas de justicia restaurativa⁹.

13. Desde la aprobación de la Declaración de Salvador, se han aprobado otras resoluciones en las que se reconoce la importancia de la participación pública en la prevención del delito y la justicia penal. Por ejemplo, en la declaración de Marrakech sobre la prevención de la corrupción¹⁰, la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

⁶ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Serie de Manuales de Justicia Penal (2006).

⁷ *Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices para la prevención del delito*.

⁸ Declaración de Salvador, párrs. 33 y 34.

⁹ *Ibid.*, párrs. 35, 43 y 51.

¹⁰ Véase la resolución 4/3 de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

exhortó a los Estados partes a que fomentaran la participación de la colectividad empresarial en la prevención de la corrupción y a que dedicaran especial atención a la creación de oportunidades para hacer participar a los jóvenes, como agentes clave, en la prevención eficaz de la corrupción en los planos interno, subregional, regional e internacional. En su siguiente período de sesiones (el quinto), celebrado en Panamá en 2013, la Conferencia aprobó la resolución 5/4, relativa al seguimiento de la declaración de Marrakech, en la que instó a los Estados partes a que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención contra la Corrupción, siguieran promoviendo la participación de personas y grupos ajenos al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones comunitarias, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y alentó a los Estados partes a que reforzaran la capacidad de esas personas y grupos a este respecto. Se reafirmó también que los Estados partes debían seguir fortaleciendo las medidas de concienciación en todos los sectores de la sociedad y que se debía prestar especial atención al trabajo con los jóvenes y los niños, como parte de una estrategia de prevención de la corrupción¹¹. En su resolución 5/5, relativa a la promoción de la contribución de los jóvenes y los niños a la prevención de la corrupción y el fomento de una cultura de respeto de la ley y de integridad, así como en su resolución 5/6, relativa al sector privado, la Conferencia subrayó la importancia de que los Estados partes promovieran la participación de los jóvenes y los niños, cuando procediera, en la elaboración de las políticas públicas para prevenir la corrupción y exhortó a los Estados partes a que promovieran la participación de la comunidad empresarial en la prevención de la corrupción.

14. Se han realizado también progresos gracias al establecimiento de un Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción, subordinado a la autoridad de la Conferencia. En los documentos preparados para las reuniones del Grupo de Trabajo celebradas en 2010, 2011, 2012 y 2013 figuran referencias a las mejores prácticas para la aplicación de los artículos 12 y 13 de la Convención en ámbitos como las alianzas público-privadas, el papel de los medios de comunicación e Internet y la concienciación¹². La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha preparado también una publicación sobre la presentación de información acerca de los casos de corrupción¹³.

15. En su reunión celebrada en Viena del 12 al 14 de octubre de 2011, el Grupo de Expertos sobre Servicios de Seguridad Privada Civil recomendó que los Estados estudiaran la posibilidad de elaborar normas para la prestación de servicios de seguridad privada civil y alentó la elaboración de códigos de conducta por el sector privado¹⁴. La Asamblea General también elaboró y aprobó los Principios y Directrices de las Naciones Unidas sobre el Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal, en los que se reconoció el papel que desempeñaban los

¹¹ Resolución 5/4 de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, párrs. 25 y 26.

¹² Véanse CAC/COSP/WG.4/2010/6, CAC/COSP/WG.4/2011/2 y Corr.1, CAC/COSP/WG.4/2012/2 y CAC/COSP/WG.4/2013/3.

¹³ UNODC, *Reporting on Corruption: A Resource Tool for Governments and Journalists* (2013).

¹⁴ Véase UNODC/CCPCJ/EG.5/2011/2.

auxiliares jurídicos y otros proveedores de asistencia jurídica a nivel comunitario, que facilitaban el acceso a la asistencia jurídica¹⁵.

16. Finalmente, el Consejo Económico y Social aprobó la resolución 2014/21, atendiendo a la recomendación de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en la que se adoptó una perspectiva de amplio alcance sobre la capacidad las políticas sociales como instrumento de promoción de la prevención eficaz del delito. En esa resolución, el Consejo reconoció que los Estados debían alentar la colaboración entre todos los niveles de gobierno apropiados y los interesados de la sociedad civil pertinentes para garantizar el fortalecimiento y la sostenibilidad de las estrategias, programas e iniciativas eficaces de prevención de delito, según procediera, y fomentar una cultura de paz y de no violencia.

II. Participación pública en el plano local: iniciativas a nivel comunitario destinadas a promover la contribución pública a la prevención del delito y la justicia penal

A. Panorama general

17. La presente sección trata sobre las iniciativas centradas en la comunidad y la participación de la comunidad en la prevención del delito, incluida la prevención de la reincidencia. Se ofrecen ejemplos de iniciativas que han puesto en marcha y que a menudo facilitan las organizaciones cívicas, como las iniciativas de justicia comunitaria, la participación en la justicia restaurativa y las medidas sustitutivas del encarcelamiento. Algunas iniciativas que en un inicio se pusieron en marcha a nivel local fueron adoptadas luego en algunos casos por los gobiernos en el marco de estrategias regionales o nacionales más amplias. Lo más destacable es, sin embargo, el mero hecho de que se hayan desarrollado y de que hayan demostrado ser eficaces en el seno de las comunidades en las que primero se identificaron los problemas, lo cual se tradujo en una mayor capacidad de contribuir a una cultura de paz y de no violencia.

18. Las intervenciones deben gestionarse en forma tal que se eviten deficiencias estructurales en el sistema de justicia penal que expongan repetidamente a determinados grupos de población a resultados adversos. Entre ellos cabría citar la victimización desproporcionada o las complicaciones con el sistema de justicia que suelen tener las poblaciones indígenas, los grupos minoritarios y los niños, y la presencia de un número desproporcionado de personas con problemas de salud mental en las instituciones penitenciarias. Es también necesario reconocer e incorporar las necesidades de las víctimas de la delincuencia, a fin de reconocer el daño sufrido y tomar las medidas que corresponda en el curso del proceso de justicia penal. Una estrategia coherente y transparente de prevención y de justicia penal ha de tener estas cuestiones en cuenta.

¹⁵ Resolución 67/187 de la Asamblea General.

B. Función de los procesos de justicia alternativa para atender a las necesidades de los jóvenes y los grupos marginados socialmente

19. En muchos países el debate público se ha centrado en las limitaciones de las funciones tradicionales del sistema de justicia penal, especialmente al abordar los complejos problemas a que se enfrentan las mujeres y los niños víctimas, así como los grupos marginados socialmente que son propensos a la victimización. De ahí que deban estudiarse enfoques alternativos, como la conexión en redes sociales para garantizar la prestación de servicios, las medidas cautelares y las penas alternativas, bajo una permanente supervisión judicial, a fin de reducir los riesgos para las víctimas y la reincidencia¹⁶.

20. Los enfoques de justicia alternativa procuran reenmarcar los procesos de justicia penal a varios niveles. Esos enfoques ponen de relieve, por lo general, métodos para abordar la delincuencia a nivel comunitario paralelos a los procesos de justicia tradicionales o que funcionan en ausencia de esos procesos. Por ejemplo, a nivel mundial, el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, en cooperación con la Unión Europea y otras organizaciones, promueve programas intensivos y temporales de colocación en hogares de acogida como alternativa a la detención para menores a la espera de juicio o como medida sustitutiva del encarcelamiento. A nivel local, el Proyecto de Prevención de la Delincuencia Juvenil y Reintegración del Plan Viet Nam procura ayudar a los menores marginados de todas las regiones de Viet Nam, y especialmente a los que pertenecen a minorías étnicas, a los que se imparte valiosos conocimientos para la vida cotidiana y laboral. A menudo se consulta a las víctimas al adoptar medidas cuyo objetivo es lograr que los delincuentes asuman la responsabilidad de sus actos.

21. El resultado de los programas alternativos en el plano de la justicia se centra a menudo en el desarrollo y la aplicación de sanciones restaurativas. En los principios básicos para la aplicación de programas de justicia restaurativa en materia penal, aprobados en 2002 por el Consejo Económico y Social, se alienta a los Estados Miembros a adoptar y estandarizar las medidas de justicia restaurativa en el marco de sus ordenamientos jurídicos. Esos procesos de justicia abarcan desde los tribunales especializados (por ejemplo, en drogas o en violencia doméstica) que pueden imponer sanciones no privativas de libertad a nivel comunitario (como el tratamiento obligatorio) hasta procesos como los programas de justicia restaurativa en los que participan los jóvenes¹⁷.

22. Cabe citar que, desde 1989, el sistema de justicia de menores de Nueva Zelanda se ha apartado de la aplicación general de la medida de encarcelamiento y viene inclinándose por incorporar medidas del ámbito de la justicia restaurativa. El modelo se ha ampliado y abarca ahora el sistema de adultos, en que también se tienen en cuenta formas autóctonas de hacer frente al conflicto y se aprovechan los puntos fuertes de las tradiciones maoríes¹⁸. En Zululand (Sudáfrica), el Programa de Justicia Restaurativa Fénix, ejecutado por cuáqueros, abarca proyectos y actividades relacionados con la justicia restaurativa en diez cárceles.

¹⁶ Véase A/CONF.222/RPM.3/1, párr. 72.

¹⁷ *Handbook on Restorative Justice Programmes*, pág. 33.

¹⁸ Vernon Jantzi, "Restorative justice in New Zealand: current practise, future possibilities" (2001).

La iniciativa se basa en el principio de que los delincuentes deben ser los agentes principales de su propia rehabilitación. Estos participan en actividades para desarrollar los conocimientos y aptitudes pertinentes que les permitirán reincorporarse a la sociedad tras su puesta en libertad. De manera análoga, el centro Biju Patnaik Open-Air Ashram de la India hace que los reclusos participen en labores humanitarias, encargándoles que distribuyan material de socorro a aldeas inundadas¹⁹. Este tipo de participación permite también que la comunidad reconozca el potencial de reintegración satisfactoria de los delincuentes.

C. Participación pública en la promoción del acceso a la justicia

23. Un paso fundamental para fomentar la confianza de la comunidad y su disposición a participar en el sistema de justicia es educar a los ciudadanos para que conozcan sus derechos de manera clara y eficaz. Ello implica también la necesidad de impartir educación a los funcionarios judiciales y jurídicos sobre sus responsabilidades al trabajar con las comunidades.

24. Hay importantes pruebas de que, cuando no existen servicios jurídicos o estos no cumplen con las condiciones requeridas, los programas de servicios jurídicos auxiliares y los procesos conexos pueden mejorar considerablemente los resultados en lo que respecta a la administración de justicia básica e informar a las personas acerca de sus derechos. Los modelos jurídicos auxiliares varían notablemente; algunos funcionan con autonomía, en tanto que otros están conectados a redes de abogados que trabajan en causas vinculadas con la defensa del interés público. Algunos modelos movilizan a voluntarios no remunerados, mientras que otros se basan en profesionales que reciben un salario²⁰. Recurrir a los auxiliares jurídicos, originalmente en Malawi y en la actualidad en toda la región de África, ha ayudado a impartir formación jurídica a los detenidos de forma tal que puedan representarse a sí mismos, a eliminar causas de importancia menor que pueden resolverse con rapidez, a promover la cooperación entre la policía, la fiscalía y los tribunales y a reducir las demoras; además ha servido de aliciente para proponer formas innovadoras de reducir la detención a la espera de juicio²¹. La expansión de los auxiliares jurídicos y su influencia en las políticas hasta en el nivel de la legislación nacional es señal de su gran importancia. Se han aprobado varias leyes de asistencia jurídica en todo el continente en las que se reconoce expresamente la función de los auxiliares jurídicos (en Malawi²², Nigeria²³,

¹⁹ UNODC, *Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders* (2012), cap. V, secc. E.

²⁰ Open Society Justice Initiative, *Community-based Paralegals: A Practitioner's Guide* (Nueva York: Open Society Foundations, 2010), cap. 1.2.

²¹ Penal Reform International, "Commonwealth East African workshop on alternative sentencing and strategies to reduce prison overcrowding: Kigali, Rwanda 9th-11th May 2011" (2011).

²² En 2011, en virtud de la promulgación de la ley de asistencia jurídica se estableció una Oficina de Asistencia Jurídica independiente, a la que se dio autorización para contratar a personal auxiliar jurídico además de a abogados. Véase "The global campaign for pretrial justice: improving pretrial justice in Malawi". (Puede consultarse en la dirección siguiente: www.opensocietyfoundations.org.)

²³ La ley de asistencia jurídica se promulgó en 2011 y otorga licencias a las personas que han superado un curso obligatorio de servicios jurídicos auxiliares para que presten dichos servicios

Sierra Leona²⁴ y Uganda²⁵). Los estudiantes de Derecho también han participado prestando distintos servicios (por ejemplo, el programa que lleva a la calle conocimientos sobre el derecho en Sudáfrica). Esos programas ofrecen beneficios tanto a los receptores como a los participantes.

D. Policía de proximidad y modelos de participación comunitaria en la prevención de la reincidencia

25. La participación comunitaria en la prevención del delito y la justicia penal supone la cooperación activa de residentes y organizaciones locales, y tiene una larga trayectoria de logros. Por ejemplo, en muchas comunidades de todo el mundo han surgido iniciativas locales de vigilancia en barrios que han pasado gradualmente a integrarse en las iniciativas gubernamentales de prevención de la delincuencia local. Se han desarrollado iniciativas de policía de proximidad en países como el Brasil, el Canadá, Colombia, el Japón, Kenya, Nigeria, Sudáfrica y Uganda con éxito notable. Aun cuando los enfoques de la policía de proximidad pueden variar, el principio general en que se inspiran es la promoción de un enfoque de la seguridad pública orientado hacia la solución de problemas que conlleva el establecimiento de alianzas con los miembros de la comunidad. A fin de desarrollar y fortalecer la alianza crucial entre la policía y la comunidad, se elaboró el *Manual de Capacitación para funcionarios de aplicación de la ley sobre servicios del VIH para consumidores de drogas por inyección*, dirigido a academias de policía y centros de formación policial. Se han recibido respuestas positivas de las autoridades del Brasil, Kenya, Kirguistán, el Pakistán, la República de Moldova, Tailandia, Ucrania y Viet Nam, que han expresado el deseo de adaptar e institucionalizar el manual y ponerlo en práctica a nivel nacional.

26. Otro buen ejemplo de contribución importante de la comunidad es el programa de agentes de libertad vigilada voluntarios desarrollado en varios países de Asia, entre ellos Filipinas, el Japón, la República de Corea, Singapur y Tailandia. Los agentes de libertad vigilada voluntarios, que son ciudadanos contratados por organismos gubernamentales, previenen la reincidencia prestando apoyo para la rehabilitación y reintegración de los delincuentes que residen en su misma localidad.

27. Se han utilizado también en las zonas urbanas las auditorías de seguridad a nivel local para adquirir un mayor conocimiento de los problemas relacionados con la delincuencia y la victimización en la ciudad de que se trate y reducir la violencia en los espacios públicos. Las auditorías de la seguridad de las mujeres, que llevó a

cuando proceda. Véase “The global campaign for pretrial justice: improving pretrial justice in Nigeria”. (Puede consultarse en la dirección siguiente: www.opensocietyfoundations.org.)

²⁴ La ley prevé un modelo mixto de prestación de servicios, desde la información jurídica y los servicios de asesoramiento hasta la representación en los tribunales. Se reconoce expresamente la función del personal jurídico auxiliar y los beneficios de las alianzas entre el gobierno y la sociedad civil. Véase “The global campaign for pretrial justice: improving pretrial justice in Sierra Leone”. (Puede consultarse en la dirección siguiente: www.opensocietyfoundations.org.)

²⁵ En la ley se reconoce expresamente a los auxiliares jurídicos como proveedores de servicios de asistencia jurídica. (Véase Hillary Nsambu, “A call for speedy passing of legal aid bill”, *New Vision* (20 de mayo de 2013). Puede consultarse en la dirección siguiente: www.newvision.co.ug.)

cabo originalmente en el Canadá el Comité de Acción de la Zona Metropolitana de Toronto sobre la Violencia contra las Mujeres y los Niños, requieren que los participantes y las organizaciones comunitarias o gubernamentales realicen investigaciones acerca de las distintas zonas de una localidad y determinen qué lugares son poco seguros o transmiten una sensación de inseguridad. Las auditorías de seguridad pueden generar varios resultados positivos, como modificar el entorno físico de las comunidades, sensibilizar a la población acerca de los efectos de la violencia en las mujeres y la comunidad en general y dar a las personas confianza y seguridad renovadas. En Guatemala, el Grupo Ceiba, un programa comunitario de asesoramiento para jóvenes, presta asistencia a los jóvenes en situación de riesgo para evitar que se unan a las pandillas, ayudándolos a hacer frente a los problemas cotidianos vinculados a la pobreza, la violencia y la alienación. Esta iniciativa y otros programas análogos reconocen la necesidad de los jóvenes de lograr una identidad y sentir que pertenecen a un grupo, y organizan actividades, cursos prácticos y debates que sirven como alternativa a la vida de las pandillas, a menudo con el apoyo de organizaciones locales, iglesias, colegios y redes comunitarias²⁶.

28. Aunque existen pruebas de los beneficios de la participación de las comunidades en las iniciativas de policía de proximidad, es necesario seguir realizando investigaciones acerca de la capacidad de los organismos policiales de mantener una participación eficaz y sostenida a nivel organizativo²⁷, puesto que la evaluación sistemática se ha limitado únicamente a proyectos y programas específicos. Debido a que en la mayoría de las principales evaluaciones de la policía de proximidad se han reconocido problemas de aplicación en alguna medida, la atención debería centrarse en la elaboración de prácticas de evaluación sistemática.

29. Al mismo tiempo, la seguridad pública y la aplicación de la ley desempeñan una función crucial, aunque a menudo no reconocida, en la protección y promoción de la salud pública. Si bien los sectores de la seguridad son asociados clave en muchos programas específicos de salud pública, rara vez se reconoce que constituyen un importante componente de la labor de salud pública (en particular, la prevención y atención del VIH). Ello se ha traducido en un enfoque por lo general inadecuado de la investigación y determinación de la forma en la que los organismos encargados de hacer cumplir la ley, especialmente la policía a nivel operacional y estratégico, pueden contribuir de manera eficaz a promover activamente y proteger la salud pública en el marco de una labor multisectorial de salud pública más amplia. Por consiguiente, la reconstrucción de la arquitectura de la salud pública y la seguridad globales para revisar la relación entre los sectores de la seguridad y la salud permitirá extraer el máximo provecho de los recursos disponibles y la responsabilidad compartida para ofrecer un modelo de salud pública global más amplio.

²⁶ Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, “Atreviéndose a querer: respuestas comunitarias a la violencia pandillera juvenil en América central y comunidades de inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos” (Washington, D.C., 2008).

²⁷ Andy Myhill, *Community engagement in policing. Lessons from the literature* (Londres, National Policing Improvement Agency, 2006).

E. Apoyo y refuerzo de la participación pública mediante el desarrollo de sistemas de acceso a información estadística de alta calidad sobre la delincuencia

30. Las universidades, los institutos de investigación y los observatorios de la delincuencia desempeñan un importante papel en la producción de datos sobre la delincuencia para apoyar el desarrollo de políticas de prevención del delito. Ello se logra realizando estudios de victimización, auditorías de seguridad locales y estudios específicos sobre los factores que impulsan la delincuencia y la violencia. La labor policial puede beneficiarse de la colaboración con esas instituciones, especialmente en los países de bajos ingresos e ingresos medianos. Por ejemplo, en el Uruguay, el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior colaboró con la policía de Montevideo para determinar las tendencias geográficas y temporales del delito²⁸. También debería fortalecerse el papel que desempeñan las instituciones independientes y profesionales encargadas de elaborar y coordinar estadística nacionales. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México es una oficina de estadística que participa activamente en el ámbito del delito y la justicia penal. Se ha determinado reiteradamente que la falta de datos sobre delito y seguridad a nivel local y la falta de procesos adecuados para generar ese tipo de datos y evaluarlos constituyen importantes impedimentos para el desarrollo, la aplicación y la medición eficaz de las repercusiones de las medidas de prevención del delito y reforma de la justicia. Esto resultó patente también en un proyecto recientemente ejecutado para desarrollar programas de seguridad comunitaria en el Estado de Palestina²⁹.

III. Función del sector privado en las actividades de prevención del delito y la justicia penal

A. Panorama general

31. El sector empresarial desempeña un papel influyente como ayuda para prevenir los delitos económicos y los que se apoyan en la informática, así como los delitos dirigidos contra las empresas. Esa participación se deriva fundamentalmente del desarrollo de nuevas tecnologías y medidas de prevención y lucha contra la delincuencia, en particular las formas delictivas relacionadas con el crecimiento del comercio electrónico y la delincuencia organizada transnacional que explota las nuevas tecnologías. En efecto, en su resolución 19/1, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal alentó a los Estados Miembros a cooperar con el sector privado para combatir todas las formas de delincuencia, incluidos el tráfico de drogas y el terrorismo.

²⁸ “La policía junto al Observatorio de Criminalidad realizarán un mapa del delito”, *UyPress* (18 de febrero de 2012).

²⁹ *Developing a community safety plan for Hebron*, Fareed A'mer et al., editores (Ginebra, Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas, 2012).

32. En un número cada vez mayor de Estados Miembros de diferentes regiones, los servicios de seguridad privada civil ofrecen servicios que tiene por objeto la prevención del delito y cumplen algunas funciones que tradicionalmente se reservan a la policía. La participación de la policía y los servicios de seguridad privada en iniciativas de cooperación plantea claramente algunos retos que, sin embargo, pueden superarse gracias a la adopción de políticas, el establecimiento de relaciones y una mayor intervención del Estado a través de marcos de cooperación formalizados. A fin de aumentar la contribución de los servicios de seguridad privada civil a la prevención del delito y la seguridad de la comunidad, los gobiernos deberían examinar diferentes enfoques de reglamentación y supervisión³⁰.

33. Hay ejemplos importantes de colaboración entre el sector empresarial, las autoridades gubernamentales y la comunidad en el ámbito de la prevención del delito y el funcionamiento del proceso de justicia penal. Figuran entre esos ejemplos las medidas adoptadas por las empresas de telecomunicaciones para denegar la reconexión a las redes de los teléfonos móviles robados, las iniciativas para reducir los robos de vehículos de motor mediante órganos paritarios como el National Motor Vehicle Theft Reduction Council de Australia (asociación de los fabricantes de automóviles, los aseguradores y las autoridades nacionales) y la cooperación internacional entre instituciones financieras y órganos gubernamentales para prevenir el blanqueo de dinero.

34. Al mismo tiempo, hay casos de alianzas de dudosa eficacia. Por ejemplo, en Australia, el Canadá y en partes de Europa, hay pruebas concluyentes de que la reducción del horario de atención al público puede reducir la violencia causada por el consumo de alcohol y los incidentes provocados por la conducción en estado de ebriedad. Sin embargo, en los lugares en que se han adoptado medidas de ese tipo, las evaluaciones han puesto de manifiesto que algunos comerciantes minoristas de bebidas alcohólicas no siempre respetan los códigos de conducta voluntarios, por lo cual crean entornos de riesgo mayor para los consumidores, a la vez que obtienen una ventaja competitiva desleal con respecto a los comerciantes que se ciñen a los códigos³¹.

B. Enfoques de las alianzas del sector privado encaminadas a promover la participación pública en la prevención del delito y los procesos de justicia penal

35. Los esfuerzos realizados por el sector privado en las esferas de la responsabilidad de las empresas y de la inversión social privada, así como otras formas de implicación del sector empresarial en medidas sociales, han contribuido a que se haga frente a una gran cantidad de problemas sociales y a que estos se reduzcan. Por ejemplo, la organización Business against Crime South Africa está integrada por dirigentes empresariales que colaboran con la policía a nivel local y nacional en ese país a fin de mejorar la eficacia de las respuestas policiales a la

³⁰ UNODC, manual introductorio titulado *Regulación por el Estado de los servicios de seguridad privada civil y contribución de esos servicios a la prevención del delito y a la seguridad de la comunidad*, Serie de Manuales de Justicia Penal (Nueva York, 2014), Introducción y cap. I

³¹ National Drug Research Institute, *Restrictions on the Sale and Supply of Alcohol: Evidence and Outcomes* (Perth, Australia, 2007).

delincuencia, ampliar los servicios ofrecidos en comisarías y expandir los programas de apoyo a las víctimas. Gracias a la iniciativa se ha elevado el número de víctimas que denuncian los delitos a la policía y los casos remitidos a otros departamentos gubernamentales³².

36. Aunque son más escasos, también hay ejemplos de iniciativas privadas que procuran específicamente reducir la inseguridad y prevenir la violencia que repercute en la calidad de vida de las comunidades. El proyecto de Parques de Paz SulAmérica, concebido en São Paulo por el Instituto Sou da Paz en colaboración con la empresa de seguros SulAmérica Seguros do Brasil, se dirige a jóvenes de barrios pobres y tiene por objeto promover la rehabilitación y la ocupación pacífica de espacios públicos y parques en zonas vulnerables de São Paulo como parte de una estrategia de prevención de la violencia³³. La investigación demuestra que son numerosas las oportunidades de que el sector privado intervenga y preste asistencia de manera concreta y eficaz³⁴.

C. El papel del sector empresarial en el desarrollo y la prevención del delito mediante el diseño

37. La prevención del delito mediante el diseño constituye una esfera específica en el campo más vasto de la prevención situacional del delito o la prevención del delito mediante el diseño ambiental³⁵. Por “diseño” se entiende un proceso creativo realizado con una finalidad específica, por lo común la de generar algún beneficio de índole social y económica. Por ejemplo, la Estrategia Nacional para la Reducción del Robo de Vehículos, empleada por primera vez en Australia y financiada actualmente por una asociación integrada por los gobiernos a nivel nacional, estatal y territorial y los sectores de los seguros y el reciclaje, reúne la intensificación de la vigilancia policial, la divulgación de información antirrobo más precisa a los conductores y otros interesados y un proyecto de formación y capacitación concebido para impartir a jóvenes ladrones de automóviles aptitudes convencionales para el empleo, en un intento por romper el ciclo del robo de vehículos³⁶. El sector privado, como impulsor de muchos de esos procesos de diseño, sin duda desempeña un papel importante en ese ámbito.

38. El diseño no se limita a la creación de productos físicos, sino que abarca igualmente la concepción de espacios, sistemas, procedimientos y procesos vitales. En los Países Bajos se estableció una plataforma nacional de control de la delincuencia, integrada por funcionarios del sector judicial, aseguradoras, la banca, el comercio minorista y organizaciones de empleadores y empleados, con el fin de

³² UNODC y Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, *Manual de Capacitación de Vigilancia en el Espacio Urbano*, Serie de Manuales de Justicia Penal (Nueva York, 2011).

³³ Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, *Alianzas Público-Privadas y Seguridad Ciudadana: Guía para la Acción* (2011), cap. II.

³⁴ *Ibid.*, Introducción.

³⁵ Paul Ekblom, The Private Sector and Designing Products against Crime, en *The Oxford Handbook of Crime Prevention*, Brandon Welsh y David Farrington, editores (Oxford University Press, 2012).

³⁶ Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, *Alianzas Público-Privadas y Seguridad Ciudadana: Guía para la Acción*, cap. I.

analizar las tendencias de la delincuencia, establecer conjuntamente prioridades en materia de políticas e iniciar programas conjuntos, así como mejorar la seguridad y el cumplimiento de la ley en relación con los delitos que afectan al sector empresarial³⁷. En 2007 se creó asimismo el Fondo para la Seguridad del Estado de Lagos como iniciativa de colaboración público-privada en el marco de una estrategia integral de control y prevención de la delincuencia. El Fondo trata de movilizar recursos del gobierno, el sector privado y la ciudadanía con miras a mejorar la capacidad operacional de los organismos de seguridad del Estado³⁸.

IV. El papel de los medios de comunicación, las redes sociales y las nuevas tecnologías de las comunicaciones

A. Panorama general

39. La difusión de información sobre el delito y sobre sucesos relacionados con la delincuencia en los medios de comunicación puede constituir una estrategia eficaz de prevención del delito y una herramienta valiosa para sensibilizar y educar al público acerca de problemas sociales que se han subestimado o pasado por alto. Los medios de comunicación también pueden ayudar a reducir la violencia y la delincuencia en la sociedad, especialmente la violencia y la delincuencia contra las mujeres y los niños.

40. Los medios de comunicación pueden desempeñar asimismo una función democrática en lo que respecta a la prevención del delito. Al difundir más información, los medios educan a la población acerca de determinadas cuestiones, lo que alienta, por consiguiente, el pensamiento crítico de la población y promueve la responsabilidad de las instituciones, los organismos, las organizaciones y el gobierno. Los medios de comunicación pueden contribuir, además, a garantizar la transparencia de las instituciones especializadas en la prevención del delito y la seguridad, y pueden promover la vigilancia del sistema policial (por ejemplo, en casos de abusos y corrupción), el sistema judicial (con respecto al trato arbitrario y la discriminación) y el sistema educativo. El papel que los medios de comunicación desempeñan en la prevención del delito puede alentar la adopción de políticas adecuadas, así como iniciativas gubernamentales, a fin de que se asignen recursos a las comunidades locales o los organismos de prevención del delito que carecen de los medios para aplicar estrategias de prevención. En definitiva, los medios de comunicación alientan a los encargados de la adopción de decisiones que controlan la formulación y aplicación de las políticas públicas a actuar de manera responsable.

41. No obstante, el nivel y el alcance de los efectos positivos de los medios de comunicación en la prevención del delito distan de ser uniformes. Parecería que la elección del formato de presentación es un elemento clave para evaluar cómo influyen los medios en las percepciones del público acerca del delito y las respuestas ante la delincuencia. Por consiguiente, es necesario tener en cuenta

³⁷ Laura Capobianco, "Ajustando la lente: participación del sector privado en la prevención del delito", documento de antecedentes (Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, 2006).

³⁸ Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, *Alianzas Público-Privadas y Seguridad Ciudadana: Guía para la Acción*, cap. II.

también una serie de posibles aspectos negativos de la influencia de los medios de comunicación, algunos de los cuales se exponen en el documento de trabajo sobre enfoques nacionales de la participación del público en el fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal (A/CONF.222/9). En primer lugar, el procesamiento de la información sobre el delito que se hace en los medios de comunicación se basa en una investigación a corto plazo, rápida y “superficial”, lo cual puede limitar los tipos de información difundida y desatender cuestiones de importancia fundamental. Los medios también pueden presentar un retrato inexacto del delito, ya que la forma de presentación suele incluir aspectos sensacionalistas de los sucesos delictivos, por lo que los reportajes “de interés periodístico” se apoyan más en la emoción que en los hechos. Por lo tanto, es necesario alcanzar un equilibrio para aprovechar al máximo los aspectos positivos de la cobertura de la delincuencia por los medios de comunicación sin prescindir de la autorreglamentación necesaria para prevenir sus aspectos negativos.

42. No debe subestimarse el potencial de la utilización de los medios sociales como herramienta de comunicación con fines de prevención del delito y justicia penal. Las redes sociales se están utilizando para crear conciencia y para intercambiar información de una forma que proporciona mayor acceso a los conocimientos y prácticas de prevención eficaz del delito, así como una mejor comprensión del sistema de justicia penal y la manera de interactuar con él de forma positiva³⁹. Los medios de las redes sociales tienen también el potencial de generar capital individual y capital social, lo cual crea mayor conciencia acerca del delito y la resistencia ante él.

B. Aplicación de enfoques de la mercadotecnia social para facilitar la contribución pública a la prevención del delito y la justicia penal

43. La mercadotecnia social es un proceso que reúne los conocimientos obtenidos de la investigación con las modernas formas de comunicación a fin de atraer a los principales grupos destinatarios. Debido a su potencial para empoderar a las personas y a las comunidades, este medio también puede facilitar el cambio social positivo mediante la participación activa⁴⁰. Los enfoques de mercadotecnia social se han utilizado por lo común en programas destinados a obtener resultados en la esfera de la salud pública, como las campañas contra el tabaquismo o la prevención de enfermedades. Suelen utilizarse menos en los entornos de prevención del delito y justicia penal, aunque hay ejemplos destacados de la utilización de esos enfoques en programas para prevenir la conducción en estado de ebriedad y la violencia en la familia. Por ejemplo, en 2007, Women’s Aid in the United Kingdom and Northern Ireland puso en marcha una campaña de mercadotecnia social en la que se utilizaron carteles y mensajes de mujeres famosas, acompañados de retratos de busto alterados, para crear conciencia sobre los efectos físicos de la violencia doméstica. La India, Nicaragua y Sudáfrica han utilizado también la mercadotecnia social para narrar historias de violencia doméstica y su repercusión en todos los miembros de la

³⁹ Murray Lee y Alyce McGovern, *Policing and Media: Public Relations, Simulations and Communications* (London, Routledge, 2013).

⁴⁰ Peter Homel y Tom Carroll, “Moving knowledge into action: applying social marketing principles to crime prevention”, en *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, núm. 381 (septiembre de 2009).

familia y la comunidad, en tanto que Australia, los Estados Unidos de América y Nueva Zelandia han puesto en marcha campañas destinadas a movilizar al público a fin de que se adopten medidas para eliminar la violencia contra la mujer⁴¹.

C. Utilización de las comunidades en Internet y los nuevos medios para la difusión de conocimientos y aptitudes: riesgos y oportunidades

44. Un problema recurrente vinculado a las actividades en el plano local dirigidas a formular y aplicar medidas innovadoras de prevención del delito es la falta de acceso a los conocimientos y experiencias de los expertos o de otras comunidades. La tecnología de Internet y las nuevas modalidades de los medios de comunicación ofrecen oportunidades para ampliar la base de conocimientos sobre buenas prácticas e iniciativas emprendidas con resultados satisfactorios⁴².

45. Por ejemplo, la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización es un proyecto que se guía por la Estrategia de la Unión Europea para la Lucha contra la Radicalización y la Captación. El proyecto tiene por objeto facilitar el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre organizaciones a través de la creación de una red y un foro de intercambio de ideas. Su objetivo es unificar los enfoques basados en la comunidad que abordan la prevención de la radicalización mediante redes de colaboración de profesionales de primera línea, expertos sobre el terreno, asistentes sociales, maestros, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de víctimas, autoridades locales, autoridades policiales y académicos. El Proyecto Eyewatch, que se puso en marcha en 2011, utiliza también Facebook para educar y preparar a las comunidades con respecto a la delincuencia y la prevención del delito, además de difundir información en tiempo real; esta iniciativa sirve también de plataforma para la participación activa de las comunidades. La información que se divulga está controlada y autorizada por jefes locales o coordinadores o gestores y se han creado hasta la fecha páginas locales y especializadas en Facebook, así como foros de participación restringida⁴³. El riesgo general que entrañan esos programas es la difusión de medidas populistas, infundadas e incluso nocivas que pueden ser un desperdicio del tiempo y los recursos limitados de que disponen las comunidades.

⁴¹ Tracy Castellino y otros, "Social marketing for preventing violence against women: making every action matter - literature review for the challenge family violence project" (Borderlands Cooperative, 2013).

⁴² Jessica Anderson, "Online communities: Utilising emerging technologies to improve crime prevention knowledge, practice and dissemination", *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, núm. 462 (abril de 2014).

⁴³ Josh Maxwell, "Project Eyewatch: reinventing Neighbourhood Watch through social media", *Royal Canadian Mounted Police Gazette*, vol. 75, núm. 1 (2013).

D. Las redes sociales y la labor policial moderna: retos y logros

46. La aparición de redes sociales en Internet presenta tanto oportunidades como riesgos para la participación ciudadana en las iniciativas de policía de proximidad y los procesos de justicia. Si bien las redes sociales tienen la capacidad de facilitar las actividades delictivas, también ofrecen oportunidades para poner en marcha medidas innovadoras de policía de proximidad y prevención del delito en las que participa la comunidad, al reunir a personas de ideas afines. Permite, además, comunicar sucesos con rapidez y enviar alertas a grandes sectores de la población, y puede adecuarse a determinadas zonas geográficas⁴⁴. Por ejemplo, en 2011 se produjeron disturbios en el Reino Unido y en Vancouver (Canadá). La Policía Metropolitana de Londres, la Policía del Gran Manchester y el Departamento de Policía de Vancouver utilizaron Twitter para publicar información sobre sus operaciones y ofrecer información actualizada a los ciudadanos. Las tres fuerzas policiales advirtieron un aumento importante del número de seguidores durante los sucesos e inmediatamente después de ellos. Durante los disturbios, el seguimiento de los debates de los usuarios de los medios sociales en general también permitió a las fuerzas policiales emitir comunicados que fueron una valiosa herramienta para combatir los rumores⁴⁵.

47. Un informe sobre el uso de los medios sociales por el personal de las fuerzas del orden en los Estados Unidos reveló que cuatro de cada cinco organismos encargados de hacer cumplir la ley utilizaban los medios de comunicación sociales con fines de indagación. Entre otros usos figuraban la compilación de fotografías o declaraciones para corroborar pruebas, la detección de actividades delictivas o la identificación de los lugares en que se perpetraban, la solicitud de información sobre delitos, la promoción de la labor de extensión en la comunidad y el logro de un mayor conocimiento de las redes delictivas⁴⁶. Sin embargo, los medios sociales y las nuevas tecnologías de las comunicaciones tienen efectos adversos inevitables, especialmente en las personas que requieren particular protección, como los menores. Los menores tienen mayor acceso a los dispositivos de comunicación modernos, y tienden a dominar el uso de la tecnología desde una edad temprana. El entorno facilita las oportunidades para utilizar la tecnología con fines de abuso y explotación de menores, ya que estos pueden establecer contacto con extraños con facilidad e intercambiar voluminosos archivos de datos de contenido sexual, racista o violento, en tanto que son limitadas las posibilidades de supervisión y vigilancia por los padres. Aumenta el riesgo de victimización, ya que a menudo los menores no comprenden cabalmente las amenazas vinculadas al uso de la tecnología moderna ni son suficientemente conscientes de que una vez que se ha intercambiado el material, se renuncia efectivamente al control sobre él. Las iniciativas encaminadas a limitar el riesgo de que los menores se vean expuestos a contenidos nocivos, adoptadas en colaboración con los proveedores de servicios, han demostrado que se pueden

⁴⁴ Lee y McGovern, *Policing and Media: Public Relations, Simulations and Communications*.

⁴⁵ Sebastian Deneff et al., "Best practice in police social media adaptation" (2012), producto D4.2.

⁴⁶ LexisNexis, "Social Media Use in Law Enforcement Investigation" (2012).

aplicar medidas de protección de manera eficaz y rápida y con la aceptación de los interesados en este proceso⁴⁷.

E. El papel de los medios de comunicación tradicionales: influencia de los medios de comunicación en las estrategias de prevención del delito

48. Los medios de comunicación tradicionales pueden utilizarse para transmitir mensajes elaborados cuidadosamente con fines de prevención del delito⁴⁸. La repercusión cada vez mayor de las distintas fuentes mediáticas en los jóvenes también ha puesto de relieve la educación mediática, dicho de otro modo, la utilización de los medios de comunicación para educar y modificar las actitudes y conductas en relación con la cobertura que la delincuencia juvenil recibe en los medios de comunicación⁴⁹. Las campañas de concienciación también pueden utilizar la infraestructura existente en la comunidad para difundir mensajes. Por ejemplo, el Proyecto Sunbird es una iniciativa conjunta australiana de lucha contra el fraude que estableció contacto con personas de la región occidental de Australia que podían haber sido víctimas de fraude perpetrado por grupos delictivos internacionales por vía postal. Además, en 2013 se establecieron la Coalición para la Seguridad en los Medios de Comunicación de Pakistán y la Alianza Internacional de los Amigos de los Medios de Comunicación para la Seguridad, integradas por interlocutores de los medios de comunicación del país que colaboraron para crear un programa unificado de seguridad para periodistas, empleados de los medios de comunicación y empresas del sector. Estos grupos amplían y fortalecen programas que se vienen ejecutando en el Pakistán y ofrecen, entre otras cosas, asistencia financiera a los familiares de periodistas asesinados, además de asistencia judicial y capacitación en materia de seguridad⁵⁰.

V. Conclusiones y recomendaciones

49. Se expone a continuación un conjunto de recomendaciones preliminares, algunas de las cuales se originaron en las reuniones preparatorias regionales del Congreso. Las recomendaciones podrían ampliarse notablemente, en particular en lo que respecta a las alianzas público-privadas, la justicia restaurativa y el papel que desempeñan la comunidad y la sociedad civil en la prevención del delito:

a) Podría alentarse a los Estados Miembros a reconocer y evaluar la función de los medios de comunicación nuevos y tradicionales en la elaboración de políticas y programas para fortalecer la prevención del delito y la justicia penal y formular

⁴⁷ Documento de sesión que contiene un estudio realizado para identificar, caracterizar y evaluar el impacto de las nuevas tecnologías de la información en el abuso y la explotación de los niños (E/CN.15/2014/CRP.1, en inglés únicamente).

⁴⁸ Brent Davis y Kym Dossetor, "(Mis)perceptions of crime in Australia", *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, núm. 396 (julio de 2010).

⁴⁹ Véase Vivien Carli, "The media, crime prevention and urban safety: a brief discussion on media influence and areas for further exploration" (Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, diciembre de 2008).

⁵⁰ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Sector de Comunicación e Información, "Progress on journalists' safety in Pakistan" (2013).

estrategias para afrontar las consecuencias positivas y las posibles consecuencias negativas de la expansión de las redes sociales⁵¹. Esas estrategias podrían centrarse en los peligros que entrañaban las actividades delictivas para el desarrollo social y económico de los países y las sociedades en general, así como en las consecuencias de cometer delitos⁵²;

b) Podría invitarse a los Estados Miembros a examinar y adoptar estrategias y programas de participación pública en el sistema de justicia penal (en ámbitos como la labor policial, las fiscalías, las autoridades judiciales, el asesoramiento jurídico y la rehabilitación), como estrategias y programas de jueces legos, agentes de libertad vigilada voluntarios, auxiliares jurídicos e integrantes de los llamados “círculos de sentencia”, a fin de aprovechar al máximo los recursos disponibles y fomentar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia penal⁵³;

c) Debería invitarse a los Estados Miembros a intercambiar mejores prácticas e información sobre la participación del sector privado en la prevención del delito y la justicia penal y a reconocer la importancia que revisten la educación y la participación de los jóvenes⁵⁴. Podría prestarse particular atención a la prevención de la delincuencia juvenil y la victimización de los niños⁵⁵;

d) Los Estados Miembros podrían solicitar a la UNODC que, siempre que disponga de recursos suficientes, elabore instrumentos de asistencia técnica para asesorar a los Estados sobre la forma de alentar y aprovechar la participación pública en las actividades de prevención del delito y justicia penal⁵⁶;

e) Podría invitarse a los Estados Miembros a estudiar la posibilidad de promover y potenciar el debate sobre las reformas estructurales necesarias para que el sistema de justicia penal pueda dar respuestas integrales a los problemas de seguridad ciudadana, como el de la violencia doméstica⁵⁷;

f) Los Estados Miembros podrían solicitar a la UNODC que investigara acerca de la necesidad y del valor añadido de elaborar directrices de las Naciones Unidas sobre la participación pública en la prevención del delito y la justicia penal que sirvan de complemento a las Directrices para la Prevención del Delito de 2002. Podría emprenderse esa tarea en colaboración con otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas como el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos;

g) Podría invitarse a los Estados Miembros a estudiar la posibilidad de asignar financiación a largo plazo para fortalecer la participación pública en la prevención del delito y la justicia penal, incluida financiación para evaluar, con el paso del tiempo, la eficacia de medidas concretas;

h) Podría alentarse a los Estados Miembros a seguir promoviendo y fortaleciendo los programas de formación en estado de derecho y derechos humanos, tanto para crear mayor conciencia pública como para asegurar la plena

⁵¹ Véase A/CONF.222/RPM.2/1, párr. 50, y A/CONF.222/RPM.3/1, párr. 73.

⁵² Véase A/CONF.222/RPM.4/1, párr. 81.

⁵³ Véase A/CONF.222/RPM.1/1, párr. 44.

⁵⁴ *Ibid.*, párr. 45; véanse también A/CONF.222/RPM.2/1, párr. 49, y A/CONF.222/RPM.3/1, párr. 73.

⁵⁵ Véase A/CONF.222/RPM.4/1, párr. 80.

⁵⁶ Véase A/CONF.222/RPM.1/1, párr. 45.

⁵⁷ *Ibid.*, párr. 46.

confianza en la supremacía de la ley y el correcto funcionamiento de la administración de justicia⁵⁸;

i) Podría alentarse a los Estados Miembros a que, al llevar a cabo actividades de prevención del delito, velen por que los ciudadanos participen en ellas de manera efectiva, constituyendo asociaciones con las comunidades locales. A ese respecto, podría invitarse a los Estados Miembros a estudiar la posibilidad de constituir comités multidisciplinarios a nivel local y mecanismos de colaboración en línea para favorecer una participación más amplia⁵⁹.

⁵⁸ *Ibid.*, párr. 46; véase también A/CONF.222/RPM.3/1, párr. 74.

⁵⁹ Véase A/CONF.222/RPM.4/1, párr. 79.